

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 7º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-15230-2020
CARATULADO	: PAREDES/FISCO DE CHILE /CDE SANTIAGO

Santiago, veintiséis de Mayo de dos mil veintidós

Vistos:

Al folio 2, comparecen don Mario Armando Cortéz Muñoz, abogado y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas, habilitado de derecho en representación convencional de don Freddy Ernesto Paredes Rivero, empleado, todos domiciliados en Carmen 602, departamento 2611, Santiago, quienes interponen demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en juicio de hacienda de mayor cuantía, en contra del Fisco de Chile representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, presidente del Consejo de Defensa del Estado, domiciliado en Agustinas N° 1687, Santiago, solicitando sea acogida en todas sus partes y condenado el demandado a pagar por concepto de indemnización por daño moral, la suma total de \$300.000.000.- más intereses y reajustes legales, con costas, o, en subsidio, a la suma que se determine en justicia y equidad de acuerdo al mérito de los antecedentes.

Primeramente, como fundamento fáctico de su demanda, reproducen un relato de don Freddy Ernesto Paredes Rivero, en el que se indica que el año 1984, en circunstancias de encontrarse cursando el tercer año de ingeniería en Química y participaba activamente en la federación de estudiantes de la Universidad de Antofagasta, como encargado del área de servicio social de la carrera y en las demandas a nivel estudiantil y marchas por el término de la dictadura. En agosto de dicho año, después de salir de una prueba se produjeron una serie de explosiones en el centro de la ciudad y un corte de energía. Indica que aproximadamente a las 22:00 horas en la casa de su polola en el sector de playa blanca, pasó una patrulla de



Foja: 1

Carabineros a la que no dio mayor importancia. Después en el trayecto a su domicilio en el pasaje Quillota, se volvió a cruzar la patrilla y media cuadra antes vio un furgón color azul oscuro, estacionado con la puerta abierta y un pie saliendo de él. Relata haber continuado caminando cuando se bajan dos sujetos encapuchados y con armas quienes le preguntan el nombre, al responder, lo golpean y lo hacen caer al suelo para subirlo por la fuerza al furgón, donde continúan golpeándolo y le vendan los ojos. Continúa su relato indicando que tras varias vueltas es trasladado a un lugar donde lo torturan, lo golpean con elementos contundentes en la cabeza, espalda y piernas, lo ahorcan y golpean en los testículos, amenazándolo de muerte, mientras lo interrogan por nombres de dirigentes estudiantiles y explosivos. Indica que habían allanado la pensión donde vivía y revisado sus cosas, donde mantenía ejercicios de química debido a su carrera y lo acusaron de ser fórmulas de explosivos, debido a lo cual lo mantuvieron detenido por 5 días, durante los cuales relata haber sido torturado constantemente y escuchó gritos de mujeres y hombres que eran torturados. Señala, entre las torturas que le fueron aplicadas, simulacro de fusilamiento en 3 ocasiones, corriente eléctrica en los testículos, pene y cabeza, privación del sueño durante todos los días y noches en que estuvo detenido, asfixia con frazadas y gorpizas grupales.

Agrega que durante el secuestro fue revisado por un médico quien autorizaba la continuación de las torturas, y transcurrido un tiempo, le hacían firmar un documento en que declaraba no haber sufrido apremios ilegítimos y otros que no pudo revisar por encontrarse con la vista tapada. Continúan su relato indicando que después fue trasladado a la fiscalía militar, acusado de transporte de armas y explosivos y posteriormente acusado por la justicia civil por la ley antiterrorista. Señala que tras muchos meses la Fiscalía Militar lo absuelve de los cargos, pero la justicia civil los mantiene, condenándolo a 5 años y un día y posteriormente rebajada la pena a 3 años y un día, para ser finalmente liberado el año 1987.

Indican los demandantes que su representado fue reconocido como víctima de violación a los derechos humanos por el propio Estado Chileno, encontrándose en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado



Foja: 1

por las Comisiones Nacionales sobre Prisión Política y Tortura, conocidas también como informes Valech I y II. Continúan refiriendo a pasajes relativos al contexto nacional contenidos en los informes Valech para indicar que la vida de su representado, don Freddy Ernesto Paredes Rivero, fue violentamente interrumpida y cambiada para siempre, a consecuencia de los hechos inhumanos abusivos y violentos que padeció, transformándolo en una víctima, un sobreviviente de los agentes del Estado al servicio de la dictadura cívico militar chilena, motivo por el cual interponen la presente demanda de indemnización de perjuicios con la finalidad de que se indemnice a su representado por los graves daños que ha sufrido y producto de los diversos abusos de los que fue víctima y que hasta el día de hoy se traducen en dolor, sufrimiento, impotencia, miedo y amargura.

En cuanto a los fundamentos de derecho de su pretensión, invoca los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, a las disposiciones de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado para establecer la responsabilidad directa del Estado por el daño que causen los órganos de administración en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de sus funciones.

Sostiene que la responsabilidad del Estado en este caso corresponde al ámbito del derecho público, invocando al respecto la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol 3354-03 y Rol 23080-08, como sustento de su defensa, y explica, previa referencia a las publicaciones de los profesores Fiamma, Soto y Oelckers que la responsabilidad de la Administración Pública surge en razón de los daños que ella causa en las actividades que desarrolla y que recaen en los administrados, daños que no tienen por qué ser soportados por el patrimonio de éstos, agregando que incluso la responsabilidad del Estado puede emanar, incluso, de su actuación lícita.

Agrega que la lesión, debe ser entendida como un perjuicio antijurídico en si mismo, perjuicio que el Administrador no tiene por qué soportar, aunque la organización o el agente que lo ocasiona, obre con toda licitud.

Argumenta, que la responsabilidad del Estado tiene origen constitucional, por lo que no se trata de una responsabilidad civil como la



Foja: 1

que se origina entre sujetos privados, que no tiende al castigo de un culpable sino a que el ejercicio de la función estatal respete la constitución en su integridad y plenitud y, por tanto, se resarza, compense o restituya la tercero/ víctima de un daño cometido por el estado en su actividad.

Explica que los hechos descritos se encuadran en lo que el derecho internacional define como delitos de lesa humanidad, invocando como fundamento la Convención de Viena, en sus artículos 53 y 64, jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Ley N° 20.357 para sostener que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados a su representado. Refiere a las disposiciones de la Ley N° 20.357 que establece los requisitos para considerar una acción como crímenes de lesa humanidad; 1. Que el acto sea cometido como de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. 2. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos

Adicionalmente, alega la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida, por encontrarse la responsabilidad estatal sujeta a las reglas del Derecho Internacional, que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros aspectos de derecho interno, invocando como fundamento de su teoría, distintas sentencias de Tribunales de la República. Adicionalmente indica como aplicable en la especie las normas contenidas en el derecho internacional, como son Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de Ginebra de 1949, Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, Reglamento de la Haya de 1907, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas



Foja: 1

cruels inhumanos y degradantes, Resolución N° 60/147 de fecha 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Pacto de San José de Costa Rica, Constitución Política de la Republica y ley 20.357, entre otras, es de derecho público, constituyendo normativa internacional humanitaria de carácter jus cogen, por los que estiman inadecuada la aplicación del Código Civil en su regulación relativa a la prescripción, debido a su insuficiencia para resolver casos de violencia internacionales, vulneraciones masivas y sistemáticas a derechos esenciales de un sector de habitantes del Estado. Invoca, finalmente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes vs Chile”.

Indica que la mayoría de nuestra jurisprudencia considera que el daño moral consiste, equivale y tiene fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona, entendiendo el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, emoción, vergüenza, pena física o moral ocasionada por el hecho dañoso. Agrega que éste tipo de daño, por ser tan natural y perceptible, que no requiere prueba, invocando como sustento de su defensa, distintas sentencias de Tribunales de la República.

Finalmente, sostiene que su representado fue víctima de: Detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos crueles, inhumanos y deliberados. Fue víctima de violaciones a sus Derechos Humanos, de persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo dañado en sus aspectos más básicos y trascendentes. Todo esto le generó un gran daño en su vida emocional, personal y laboral, las vejaciones de las que fue víctima han hecho que don Freddy hasta el día de hoy, no pueda llevar una vida normal a pesar de los esfuerzos que ha realizado por ello, toda vez que sigue, sufriendo y siendo atormentado por lo vivido.



Foja: 1

Al folio 10 se notificó la demanda al Fisco de Chile, en calidad de demandado, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado don Juan Antonio Peribonio Poduje.

Al folio 11 comparece doña Ruth Israel López, abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien contesta la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en su contra, solicitando el rechazo de dicha acción por las excepciones, defensas y alegaciones que opone, con costas.

A folio 14, comparece don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, en representación del demandante, quien evacúa el trámite de la réplica.

A folio 16, comparece doña Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien evacúa el trámite de la réplica, reiterando todas las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en la contestación.

A folio 16, se recibió la causa a prueba.

A folio 33, con fecha 20 de abril de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparecen don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas, habilitado de derecho en representación convencional de don Freddy Ernesto Paredes Rivero, quienes interponen demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en juicio de hacienda de mayor cuantía, en contra del Fisco de Chile representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, presidente del Consejo de Defensa del Estado, solicitando sea acogida en todas sus partes y condenado el demandado a pagar por concepto de indemnización por daño moral, la suma total de \$300.000.000.- más intereses y reajustes legales, con costas, o, en subsidio, a la suma que se determine en justicia y equidad de acuerdo al mérito de los antecedentes.

Funda su demanda en los hechos y argumentos referidos en la parte expositiva de esta sentencia;

SEGUNDO: Que, a folio 11, comparece doña Ruth Israel López, abogada, procurador fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, ambos domiciliados en Agustinas N°



Foja: 1

1687, Santiago, quien contesta la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta en su contra, solicitando el rechazo de dicha acción por las excepciones, defensas y alegaciones que opone, con costas. En subsidio, solicita sea rebajada el monto indemnizatorio pretendido y se conceda el pago de reajustes e interese solo desde el cúmplase de la sentencia, y se exima a su parte del pago de las costas, por tener motivo plausible para litigar.

En primer lugar, deduce la excepción de reparación integral alegando la improcedencia de la demanda por haber sido ya indemnizada la demandante, defensa que opone, atendida a las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, haciendo presente al efecto que la Ley N° 19.123, así como otras normas jurídicas conexas, en su conjunto han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a tales víctimas y familiares, estableciéndose al efecto los siguientes mecanismos: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas. Sostiene que por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional, que busca la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Que, en cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, indica que en término de costos generales para el Estado de Chile, dicho tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2015, las siguientes sumas de dinero: a) Pensiones: La suma de \$247.751.547.837.-, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123; b) Bonos: La suma de e \$41.910.643.367- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.- d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.- En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

En síntesis, a diciembre de 2015, el Fisco de Chile ha desembolsado un total de \$992.084.910.400.-En la especie, indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la Ley N° 19.992, y sus respectivas



Foja: 1

modificaciones, leyes que establecieron una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, a saber, una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; la suma de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad, y la cantidad de \$1.549.422, para mayores de 75 años de edad. Adicionalmente a los montos antes referido, la demandante recibió en forma reciente el aporte único de reparación contemplado por la Ley N° 20.874, por la suma de \$1.000.000.-

Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, y a los de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, indica que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH, se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a estas violaciones, con el propósito de entregar una satisfacción a las víctimas que en parte, logre reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral. Entre ellas destaca la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley



Foja: 1

Nº 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo al demandante, no sólo han cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que se han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad financiera, las que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones. En ese sentido, cita lo resuelto la Excma. Corte Suprema en los autos Rol Nº 4742-2012 y 2400-2002. Asimismo, indica que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado, por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Estando entonces la acción deducida en autos basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizados los daños sufridos por la demandante.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de las acciones y derechos invocados en la demanda, toda vez que de acuerdo al relato de la actora, desde la detención ilegal y tortura que sufrió hasta que la demanda fue notificada a su parte con fecha 22 de marzo de 2021, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la dictadura militar.

En subsidio y para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, prevista en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil por cuanto entre la fecha en que se habrían



Foja: 1

hecho exigible el derecho a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Después, en relación a la jurisprudencia sobre la prescripción, hace mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en los autos N° 10.665- 2011 y al derecho internacional de los derechos humanos en los cuales no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

Concluye que no existiendo norma especial que determine el plazo de prescripción que debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que fija un plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto, solicitando, además, se tenga presente lo resuelto por la Corte Suprema en sentencia de 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

Expone, que la indemnización de perjuicios no tiene un carácter sancionatorio, por tratarse de una institución de contenido netamente patrimonial, de modo que, como toda acción patrimonial, se encuentra expuesta a extinguirse por prescripción.

En tercer lugar y en cuanto al daño reclamado, y en subsidio de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, su parte controvierte expresamente el monto del daño moral demandado, en cuanto a su naturaleza así como a su excesivo monto, haciendo presente que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificándolo, en términos económicos, como el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente de satisfacción.

Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la



Foja: 1

cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente. Al efecto, cita lo resuelto por la Il. Corte de Apelaciones, en los autos N° 6891-2013.

En cuarto lugar y en forma subsidiaria, alega que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos esgrimidos en autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del estado y que seguirá percibiendo a título de pensión y los beneficios extrapatrimoniales que los distintos cuerpos legales contemplan, pues su finalidad fue precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por la demandante en su libelo, esto es, desde la notificación de la demanda, por cuanto mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia;

TERCERO: Que, al folio 14 comparece don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, en representación del demandante, quien evacua el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda ejercida contra el Fisco de Chile.

En cuanto a la excepción de reparación integral e improcedencia de la indemnización opuesta por la parte demandada, indica que las cifras referidas en la contestación no dicen relación con la situación particular del demandante ni con reparación solicitada en estos autos, agregando que no hay norma que refiera a la incompatibilidad con la indemnización pretendida. Señala que la defensa fiscal solo se basa en una suposición de



Foja: 1

que esta normativa de carácter asistencial y administrativa, fue dictada para reparar el daño moral sufrido por las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, normativa que es asumida voluntariamente por el Estado y que no significa en ningún caso la renuncia de la víctima a ejercer la presente acción judicial.

Sostiene que las normas internas invocadas por el Fisco, están siendo presentadas de manera contradictoria con las normas y principios del Derecho Internacional y que son pertinentes al caso, por lo que la normativa citada por el Fisco, pondría a nuestra legislación en una postura sin sentido, ya que no estaría respondiendo al orden armónico, lógico y coherente que debe tener nuestra legislación, que por cierto integra las normas del Derecho Internacional a través de norma expresa, como lo es el Artículo 5°, inciso segundo de la Constitución Política de la República de Chile. Y agrega que las normas invocadas por el Fisco no contemplan incompatibilidad alguna con la indemnización perseguida y estima que no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, por tratarse de formas distintas de reparación.

Sostiene la improcedencia de la acción opuesta, invocando como fundamento la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile y agrega que la jurisprudencia de los últimos años de la Corte Suprema ha variado notablemente hacia una interpretación razonable y adecuada con su deber de ejercer un efectivo control de convencionalidad. Alega que el propio Estado ha reconocido el carácter no excluyente de las medidas administrativas, confirmando que las vías de reparación administrativa y judicial son complementarias y no excluyentes,

En cuanto a la excepción de prescripción, opuesta por la contraria, indica que no pueden aplicarse en la especie las disposiciones contenidas en el Código Civil y hacerlo resultaría un incumplimiento por parte del Estado de Chile a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Invoca una serie de sentencias de distintos Tribunales de la República como fundamento para desestimar la excepción de prescripción opuesta por la defensa fiscal.



Foja: 1

Respecto de las alegaciones de la defensa fiscal en relación al daño e indemnización que se reclaman, indica que el monto solicitado es de plena justicia, toda vez que su representado fue sometido a tortura, persecución y prisión política por agentes del estado, siendo dañado en sus aspectos más básicos y trascendentes, generándole un gran daño en su vida emocional y personal.

CUARTO: Que, al folio 16, comparece doña Ruth Israel López, abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien evacúa el trámite de la dúplica, reiterando todas las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en la contestación.

QUINTO: Que, mediante resolución de fecha 28 de abril de 2021, se recibió la causa a prueba, estableciéndose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos ahí señalados, resolución notificada a la demandante con fecha 30 de diciembre de 2021 y a la parte demandada con fecha 16 de febrero de 2022;

SEXTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba documental:

1- Copia extracto de documento Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, específicamente el Capítulo II Título II.

2- Copia presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador del Equipo PRAIS, en el cual señala las Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los Derechos Humanos.

3- Copia, presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador Especializado del Equipo PRAIS, en el cual señala la Transgeneracionalidad del daño generado a víctimas de violación a los Derechos Humanos.

4- Copia, conferencia Internacional denominada Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena, del Ministerio de Salud de Chile.



Foja: 1

5- Copia, informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, Página 125 cometidas durante la dictadura militar, elaborado por PRAIS y suscrito por doña Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS.

6- Artículo denominado Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador, escrito por el Psicólogo Clínico del programa PRAIS de la Araucanía Norte, don Sergio Beltran P.

7- Copia, informe denominado, Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico, realizado por la Vicaria de la Solidaridad.

8- Copia, informe denominado Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, realizado por la Vicaria de la Solidaridad. (Programa de salud).

9- Copia, informe, sobre la tortura, tratos crueles e inhumanos y su impacto psicológico, las prácticas de amedrentamiento a la población, relegaciones y su impacto psicológico en las personas y en la familia, entre otros.

10- Copia, informe denominado: Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos, realizado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad.

11- Copia, informe denominado: Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos, realizado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, integrado por los Doctores. Andrés Donoso, Guillermo Hernández, Ramiro Olivares, el Psicólogo Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería Janet Ulloa.

12- Copia, informe realizado por el equipo de profesionales de la salud de La Vicaria de la Solidaridad, denominado: Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas.

13- Copia, estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia, realizado por el Neuropsiquiatra Jacobo Riffó y la Psicóloga Viviane Freraut del equipo de salud mental del DITT



Foja: 1

(Detención, Investigación y Tratamiento de la Tortura) y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo).

14- Estudio Significado psicosocial de la tortura, ética y reparación, realizado por doña Elisa Neumann, psicóloga y por don Rodrigo Erazo, psiquiatra, del equipo médico psiquiátrico de FASIC.

15- Monografía denominada Lo Igual y lo Distinto en los Problemas Psicopatológicos Ligados a la Represión Política, realizada por el Psiquiatra Mario Vidal del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).

16- Estudio denominado Trauma Político y Memoria Social realizado por E. Lira y M. Castillo, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

17- Ponencia denominada Tortura y Trauma Psicosocial, realizada por el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga, miembro del Comité Directivo y director clínico de CINTRAS, integrante del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT).

18- Estudio denominado Consecuencias Psicosociales de la Represión Política, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira.

19- Monografía denominada Aspectos Psicosociales de la Represión Durante la Dictadura, realizado por María Teresa Almarza, Psicóloga del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).

20- Monografía denominada Tortura y trauma: El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas, realizada por el Psiquiatra Carlos Madariaga, de CINTRAS.

21- Estudio denominado las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica, realizado por el doctor Hernán Reyes, de la división de asistencia de la Cruz Roja Internacional.

22- Extracto de la Nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en el que se consigna bajo el número 18235 a don Freddy Ernesto Paredes Rivero.

23- Capítulo III (3) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Contexto.



Foja: 1

24- Capítulo V (5) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Métodos de tortura: definiciones y testimonios.

25- Capítulo VIII (8) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Consecuencias de la prisión política y la tortura.

26- Copia de Informes denominados: -La Tortura Modelo de Intervención. y; La Tortura Un Problema Médico. Ambos emitidos y realizados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

27-Copia de Informe denominado: -Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Realizado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latino Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).

28.- Informe psicológico emitido por Carolina Canales Cortes, Psicóloga, respecto del demandante, en que se informa en las conclusiones que la víctima presenta trastorno de estrés post traumático de carácter grave y externo, daños, secuelas psicológicas y alteraciones en su salud mental, producto de los acontecimientos que debió enfrentar como víctima de prisión política y tortura durante la dictadura militar chilena.

29.- Copia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el caso Órdenes Guerra y otros vs Chile, con fecha 29 de noviembre de 2018.

SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada rindió la siguiente prueba instrumental:

1.- Copia de Oficio Ord DSGT N° 4792/1036 emitido por el Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, dirigido a la Procuraduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, de fecha 06 de abril de 2021;

OCTAVO: Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que, don Freddy Ernesto Paredes Rivero, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos



Foja: 1

Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctima de Presión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, Registro N° 18.235.

2.- Que, don Freddy Ernesto Paredes Rivero, ha obtenido los siguientes beneficios de reparación contemplados en las Leyes N° 19.992: pensión acumulada, \$29.801.574.-; aguinaldos del periodo por \$518.325.-, y aporte único Ley 20.874 por \$1.000.000.-, lo anterior, al mes de abril de 2021 y una pensión actual Valech por \$194.727.-;

NOVENO: Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por don Freddy Ernesto Paredes Rivero en contra del Fisco de Chile, en atención al daño sufrido producto de su detención y torturas en manos de agentes del Estado, quien fuera reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos, por la denominada Comisión Valech, solicitando una indemnización ascendente a \$300.000.000 por concepto de daño moral.

Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo excepción de reparación integral, por cuanto el actor ha sido reparado mediante desagravios de carácter simbólico y en programas; y haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;

DÉCIMO: Que, en cuanto a la denominada “excepción de reparación integral” que opone la demandada, por haber sido resarcida la actora en conformidad a la Ley N° 19.123, cabe señalar que si bien consta en Oficio Ord DSGT N°4792-1036, del Instituto de Previsión Social, que don Freddy Ernesto Paredes Rivero obtuvo beneficios de reparación contemplados en las Leyes N° 19.992, a abril de 2021, por un total de \$29.801.374.-; aguinaldos del periodo por \$518.325.-, y aporte único Ley 20.874 por \$1.000.000.- y una pensión actual Valech por \$194.727.- lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones



Foja: 1

que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta magistrado- con una reparación meramente simbólica.

No obstante lo expuesto, la reparación que haya hecho el Estado en relación a las víctimas de violaciones a los DDHH, no puede dejar de considerarse al momento de determinar el monto de los perjuicios, por cuanto parece razonable que estas medidas tengan un efecto en la extensión del daño cuya indemnización ahora se demanda;

UNDÉCIMO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que, en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa



Foja: 1

humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que "... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción



Foja: 1

civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada;

DÉCIMO SEGUNDO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión del actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Los hechos establecidos en el motivo octavo precedente, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Freddy Ernesto Paredes Rivero.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de



Foja: 1

las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

DÉCIMO TERCERO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama la demandante.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral, ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en



Foja: 1

sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

DÉCIMO CUARTO: Que, en orden a acreditar su existencia y valuación, el demandante rindió prueba documental, que da cuenta, de las secuelas psicológicas y emocionales que presenta al día de hoy;

DÉCIMO QUINTO: Que, al momento de determinar el monto de la indemnización, se tendrá presente que resulta un hecho no controvertido que el actor fue víctima de violación a los DDHH, sin embargo, la prueba rendida, impide a este tribunal acceder a la demanda en los términos y montos solicitados.

En efecto, la documental acompañada al proceso resulta insuficiente como para determinar la extensión del daño causado al demandante, pues no existe algún registro de los días en que estuvo privado de libertad de forma irregular – debiendo recalcar que en el libelo se reconoce privación de libertad en virtud del cumplimiento de una sentencia- o las circunstancias en que habrían tenido lugar los apremios ilegítimos. Con todo, la calidad a que se ha hecho mención en el primer párrafo de este considerando, unido al informe elaborado por la psicóloga Carolina Canales, en que se consignan las secuelas que dejó para la demandante los vejámenes sufridos, permiten a este tribunal fijar prudencialmente el monto de la indemnización en la suma de 12.000.000.- (doce millones de pesos);

DÉCIMO SEXTO: Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de esta sentencia y el mes que preceda al pago y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente



Foja: 1

vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47 y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución Política de la República; Convención Americana de Derechos Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve que:

I.- Se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por la demandada;

II.- Se acoge, parcialmente, la demanda de lo principal de 6 de octubre de 2020 y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a título de daño moral, la suma de doce millones de pesos (\$12.000.000.-) a favor del demandante don Freddy Ernesto Paredes Rivero, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo sexto precedente;

III.- Se exime del pago de las costas a la demandada.

Notifíquese, regístrese, consúltese si no se apelaré, y archívese en su oportunidad.

Nº 15.230-2020.

Pronunciada por doña Carolina Ramírez Reyes, Juez Titular.



Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiséis de Mayo de dos mil veintidós**

